



Alerta de Austeridad Global:

Recortes Presupuestarios Inminentes en 2021-25 y Vías Alternativas

Autores: Isabel Ortiz y Matthew Cummins

Publicado originalmente por: Initiative for Policy Dialogue (IPD) / Global Social Justice (GSJ) International Confederation of Trade Unions (ITUC) Public Services International (PSI) / Arab Watch Coalition (AWC) The Bretton Woods Project (BWP)/Third World Network (TNW)

Fecha: abril de 2021

Título original en inglés: [Global Austerity Alert - Looming Budget Cuts in 2021-25 and Alternative Pathways](#)

El mundo vivió una década de austeridad entre 2010 y 2019. Luego, en 2020, la COVID-19 catalizó una de las mayores crisis humanas y económicas de la historia moderna. El documento [Global Austerity Alert - Looming Budget Cuts in 2021-25 and Alternative Pathways](#) advierte de un incipiente choque de austeridad fiscal post-pandémico – mucho más prematuro y severo que el que siguió a la crisis financiera mundial – y presenta opciones para garantizar que las poblaciones no tengan que volver a sufrir recortes de austeridad. Lo hace mediante: (i) exámen de las proyecciones de gasto público del FMI hasta 2025; (ii) resumen de las medidas de austeridad más comunes que deben evitarse dado su impacto social negativo; y (iii) solicitud a los gobiernos que creen urgentemente un espacio fiscal para financiar una recuperación socioeconómica equitativa y el progreso hacia la realización de los derechos humanos y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El análisis de las proyecciones de gasto muestra que se prevén recortes de austeridad en 154 países en 2021, y hasta en 159 países en 2022. La tendencia se mantiene al menos hasta 2025, con una media de 139 países cada año, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), contenidas en la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2020. Se prevé que la austeridad afecte a 5.600 millones de personas en 2021, es decir, aproximadamente el 75% de la población mundial, y que aumente a 6.600 millones, es decir, el 85% de la población mundial, en 2022. En 2025, 6.300 millones de personas, o el 78% de la población total, podrían seguir viviendo bajo la austeridad.

Desde 2008, dos grandes crisis mundiales dieron lugar a breves períodos de expansión fiscal, limitados a uno o dos años, seguidos de largos períodos de austeridad socialmente dolorosa. Esto ocurrió en 2008-09, al comienzo de la crisis financiera y económica mundial, y luego en 2020, durante las primeras oleadas de COVID-19. Tras breves periodos de expansión fiscal, los gobiernos -aconsejados por el FMI, el G20 y otros- redujeron rápidamente las tan necesarias ayudas públicas, con consecuencias adversas para la mayoría de la población.

La historia se repite ahora

Los altos niveles de gasto necesarios para hacer frente a la pandemia y a la crisis socioeconómica resultante han dejado a los gobiernos con déficits fiscales y deuda crecientes. Sin embargo, en lugar de seguir explorando

opciones de financiación para proporcionar el apoyo que tanto necesitan las personas y la economía, los gobiernos están entrando en otro periodo de austeridad fiscal.

El choque post-pandémico parece ser mucho más intenso que el que siguió a la crisis financiera y económica mundial de 2008-09. Se prevé que la contracción media del gasto en 2021 sea del 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que supone casi el doble de la crisis anterior, y del 1,7% del PIB en 2022. Aún más preocupante es el lugar común de la contracción presupuestaria excesiva, definida como el gasto inferior a los niveles (ya bajos) anteriores a la pandemia. Se prevé que casi 50 gobiernos gasten menos en 2021-22 que en 2018-19, en una media del 2,9% del PIB. Si se observan los cambios reales, se prevé que más de 40 gobiernos tengan presupuestos un 12% menores en 2021-22 que en 2018-19, en promedio, incluyendo países con grandes necesidades de desarrollo como Ecuador, Guinea Ecuatorial, Kiribati, Liberia, Libia, República del Congo, Sudán del Sur, Yemen, Zambia y Zimbabue.

Los peligros de una austeridad temprana y excesivamente agresiva están claros en la última década de ajustes. Entre 2010 y 2019, miles de millones de vidas se vieron alteradas por la reducción de las pensiones y las prestaciones de la seguridad social; la disminución de los subsidios, incluidos los de alimentos, fertilizantes y combustibles; los recortes y los topes de la masa salarial, que obstaculizaron la prestación de servicios públicos como la educación, la sanidad, las obras sociales, el agua y el transporte público; la racionalización y la focalización de los programas de protección social, de modo que solo las poblaciones más pobres recibieron prestaciones cada vez menores, mientras que la mayoría de las personas quedaron excluidas; y la disminución de la seguridad del empleo para los trabajadores, al desmantelarse la normativa laboral. En muchos países se redujeron y/o privatizaron los servicios públicos, incluida la sanidad. Muchos gobiernos también introdujeron medidas regresivas de generación de ingresos, como los impuestos sobre el consumo, que redujeron aún más la renta disponible de los hogares, tras las importantes pérdidas de empleo causadas por la menor actividad económica. La austeridad fiscal también resultó ser una política letal: El débil estado de los sistemas de salud pública -sobrecargados, sin fondos y sin personal suficiente por una década de austeridad- agravó las desigualdades sanitarias e hizo que las poblaciones fueran vulnerables al COVID-19.

Tras el devastador impacto de COVID-19 en los países, la austeridad sólo causará más sufrimiento y dificultades innecesarias a las poblaciones. Con los bloqueos para contener el COVID19, las economías cayeron en recesión. La pérdida de producción mundial en 2020 se estima en 5,8 billones de dólares. Según la Organización Internacional del trabajo (OIT), en 2020 se perderán más de mil millones de empleos a tiempo completo. El Banco Mundial estima que 275 millones de personas cayeron por debajo del umbral de pobreza internacional de 3 dólares al día en 2020-21. La desigualdad de ingresos también ha aumentado como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El número de pobres extremos en el África subsahariana aumentó en unos 50 millones durante 2020, el mayor cambio en al menos 40 años, y es probable que empeore en 2021.

La inseguridad alimentaria también se encuentra en niveles récord, con los precios internacionales de los alimentos en tendencia al alza a principios de 2021. En cuanto al acceso a los servicios públicos, antes de la pandemia, las poblaciones de bajos ingresos ya se enfrentaban a fallos sanitarios debido al débil estado de los sistemas de salud pública. Las amenazas sanitarias básicas, como la malaria, la diarrea y el cólera, están reapareciendo en muchos lugares, al tiempo que los centros de salud se ven desbordados por los pacientes del COVID-19 y las campañas de vacunación se enfrentan a un reto tras otro. En el ámbito de la educación, las y los niños de todo el mundo han perdido casi el 80% de las clases desde marzo de 2020, justo cuando se han recortado los presupuestos de educación en muchas regiones. La pandemia también ha provocado un aumento

de la incidencia de la violencia contra las mujeres y los niños ("la pandemia en la sombra") y la crisis mundial de salud mental. Lo que está claro es que los recortes presupuestarios no van a generar puestos de trabajo, ni a proporcionar el apoyo a los ingresos necesarios, ni a mejorar los servicios sociales en un momento en que las necesidades de la gente son enormes y van en aumento.

Hoy en día, es imperativo vigilar las medidas de austeridad que generan resultados sociales negativos. Entre ellas se encuentran: (i) recortes o topes de la masa salarial; (ii) reducción de los subsidios; (iii) reformas de las pensiones y de la seguridad social; (iv) racionalización y focalización de la asistencia social/redes de seguridad; (v) reformas de flexibilización laboral; (vi) aumento de los impuestos sobre el consumo o del impuesto sobre el valor añadido (IVA); y (vii) privatizaciones y asociaciones público-privadas (APP). Estas medidas de austeridad tienen impactos sociales perjudiciales y deben evitarse, hay alternativas. Después del devastador impacto de COVID-19 en los países, la austeridad sólo causará más sufrimiento y dificultades innecesarias a las poblaciones.

Caminos alternativos

La austeridad no es inevitable; hay vías alternativas, incluso en los países más pobres. Las siguientes opciones de financiación o espacio fiscal están respaldadas por las declaraciones políticas tanto de las Naciones Unidas como de las instituciones financieras internacionales: (i) aumentar los ingresos fiscales; (ii) ampliar la cobertura de la seguridad social y los ingresos contributivos, para la protección social; (iii) pedir préstamos o reestructurar/reducir la deuda existente; (iv) eliminar los flujos financieros ilícitos; (v) reasignar el gasto público; (vi) utilizar las reservas de divisas fiscales y del banco central; (vii) presionar para aumentar la ayuda y las transferencias; y (viii) adoptar un marco macroeconómico más acomodaticio.

Las decisiones de gasto y financiación que afectan a la vida de millones de personas no pueden tomarse a puerta cerrada en el Ministerio de Finanzas: Todas las opciones deben ser examinadas cuidadosamente, incluyendo los posibles riesgos y compensaciones, y consideradas en un diálogo social nacional inclusivo. El diálogo social nacional es el mejor para articular soluciones óptimas en materia de política macroeconómica y fiscal, la necesidad de seguridad en el empleo y los ingresos y los derechos humanos.

Los ciudadanos han desafiado, y a veces con éxito, las medidas de austeridad durante la última década. En más de 100 países, las y los ciudadanos protestaron contra las políticas diseñadas a puerta cerrada en el Ministerio de Finanzas, y muchos salieron victoriosos. Por ejemplo, tras las manifestaciones y las campañas, los gobiernos restablecieron los subsidios (Bolivia en 2010, Ecuador en 2019, Nigeria en 2012), revirtieron los aumentos de impuestos sobre los bienes básicos (Burkina Faso, Camerún y Costa de Marfil en 2008) y revirtieron los aumentos de las tarifas del agua (Irlanda en 2016) y el aumento de las tarifas estudiantiles (Sudáfrica en 2016). En cuanto a las reformas de las pensiones y la seguridad social, los tribunales de Letonia (2010), Rumanía (2010) y Portugal (2013) también declararon ilegales e inconstitucionales los recortes de austeridad y obligaron a restablecer las prestaciones sociales.

Existe una campaña mundial para detener las medidas de austeridad que tienen un impacto social negativo: #EndAusterity. En 2020, más de 500 organizaciones y académicos de 87 países han hecho un llamamiento al FMI y a los Ministerios de Finanzas para que detengan inmediatamente la austeridad y, en su lugar, apoyen políticas que promuevan la justicia de género, reduzcan la desigualdad y den prioridad a las personas y al planeta. Los pasos a seguir incluyen (i) identificar si su gobierno está reduciendo los gastos, o planea hacerlo en un futuro próximo; (ii) en caso de austeridad, articular demandas alternativas para la recuperación post-pandémica; (iii)

convocar un diálogo social nacional, que esté informado por una evaluación rápida de los impactos sociales de las diferentes opciones políticas y su financiación; y (iv) acordar políticas óptimas a través de un diálogo social nacional inclusivo con representantes de los sindicatos, los empresarios, los grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas.

Dada la importancia de la recuperación de la COVID-19, es imperativo que los gobiernos exploren todas las alternativas posibles para ampliar el espacio fiscal a fin de promover el desarrollo socioeconómico sostenible, los derechos humanos, el trabajo decente, la protección social universal y los servicios públicos de calidad, y lograr la prosperidad a largo plazo para todos.

Para leer el reporte completo (en inglés), accede a este link: [Global Austerity](#).